

[Imprimir Página Web](#)

Corrupción en PEMEX: la estrategia del escándalo

Fernando Escalante Gonzalbo
ARI N° 109-2002 - 29.11.2002

Tema: La convocatoria electoral de julio próximo, para renovar el Congreso federal, planeará sobre el caso PEMEX durante los meses venideros

Resumen: En el reciente escándalo de corrupción en PEMEX hay hasta ahora mucho más ruido que sustancia y éste se refiere básicamente a una posible financiación ilegal de la campaña del PRI en 2000. Es un episodio que cobra sentido con miras a las próximas elecciones federales de 2003. Con un panorama económico bastante oscuro, muy escasos resultados de gobierno y sin capacidad para impulsar reformas de fondo, el gobierno y su partido necesitan ganar algo de popularidad: la denuncia de la corrupción y la recuperación del ánimo antipriísta ofrecen la estrategia que parece más rentable. Sin embargo, su eficacia electoral es dudosa.

Análisis: Poco después de iniciado el gobierno del Presidente Fox comenzó a haber filtraciones de información oficial que señalaban graves irregularidades en la gestión de la empresa paraestatal petrolera (PEMEX). Las acusaciones eran sumamente imprecisas, pero el Secretario de la Contraloría General daba a entender, en declaraciones públicas, que se trataba de un caso de la mayor importancia, que implicaría a los más altos funcionarios del gobierno anterior. Con acusaciones poco claras se pidió a Estados Unidos la detención del exdirector de la empresa, Rogelio Montemayor, contra quien se sigue un proceso de extradición sumamente lento y de dudoso resultado.

A principios de septiembre de 2002 se dio el paso más importante con una solicitud formal de desafuero de dos legisladores priístas, líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana). Lo más sorprendente fue el momento en que se hizo: unos días después de que el Presidente pidiese a la oposición una actitud responsable, en busca de acuerdos para el gobierno y la reforma del Estado, y mientras estaba pendiente una negociación laboral con el mencionado sindicato, que había emplazado una huelga para los primeros días de octubre.

La primera consecuencia fue un enfrentamiento público, el más violento hasta la fecha, entre el gobierno y el PRI (que incluyó entre otras cosas que los diputados priístas abandonasen la comparecencia ante el Congreso del Secretario de Gobernación, Santiago Creel). Lo siguiente fue un endurecimiento de la posición del sindicato en su negociación con PEMEX que llevó casi al estallido de la huelga. Ambas cosas contribuyeron a subrayar la importancia del caso, convertido en el tema único de la agenda pública durante quince días. La conjuración de la huelga y la integración de la sección instructora para el desafuero en la Cámara de Diputados fueron importantes victorias para el gobierno, pero que comprometen su estrategia futura.

Han continuado, de manera persistente, las filtraciones de información oficial, en particular las declaraciones de "testigos protegidos" cuyas acusaciones son, con frecuencia, inverosímiles (por ejemplo, que el dinero se transportase en el vehículo del candidato priísta a la Presidencia, Francisco Labastida, o que implicase de manera directa y personal a los líderes del PRI en las dos cámaras: Beatriz Paredes y Enrique Jackson). En términos prácticos, lo que puede saberse sobre la acusación hace que sea mucho menos espectacular: se trataría de un préstamo de la empresa al sindicato en el año 2000, recuperado mediante descuentos por la empresa en el mismo año, cuyo dinero se presume que podría haberse usado para financiar la campaña del PRI; es decir: no habría desviación directa de recursos de la empresa ni un daño patrimonial a ésta, sino una operación de financiación ilegal del PRI por parte de los líderes sindicales.

La estrategia electoral

El momento escogido para iniciar los procedimientos y la publicidad que se dio al caso es buena muestra de la intención de acentuar la confrontación entre el gobierno y el PRI. Eso significa también que se ha renunciado a la posibilidad de negociar con la oposición cualquier reforma sustantiva de la legislación; de hecho, después de que fuese rechazada la propuesta de reforma del sector eléctrico, el gobierno no ha presentado ninguna de las iniciativas de ley que había anunciado como parte de su programa: reformas del sistema fiscal, reforma financiera, energética, laboral y de las telecomunicaciones.

En una situación de estancamiento económico, sin ningún cambio sustantivo que acredite la voluntad reformista del

gobierno, renunciar a la negociación de cualquier acuerdo de fondo con la oposición sólo tiene sentido en términos de la imagen pública del Presidente y el PAN, con miras a las elecciones del próximo año. Significa, básicamente, hacer más notoria y más importante la ruptura del gobierno con el PRI, para hacer creíble la reiterada promesa de "cambio"; a falta de mejores opciones, parece verosímil que el PAN y el gobierno traten de recuperar de alguna manera el clima de opinión y el ánimo que produjo el triunfo electoral del año 2000, es decir, recuperar la coalición antipriísta basándose en la corrupción. Un dato resulta revelador: para 2003 el Ejecutivo ha presentado un presupuesto sumamente restrictivo, sin ampliación del gasto social (cosa rara en año de elecciones); la única Secretaría de Estado para la que se solicita un aumento considerable de recursos es la Contraloría General de la Federación.

Por otra parte, la estrategia de los demás partidos parece coincidir en la intención de hacer de la elección federal de 2003 una elección "plebiscitaria" donde se vote a favor o en contra de Vicente Fox. El estancamiento económico y la política restrictiva del gasto público serán, sin duda, los motivos fundamentales para el PRI y el PRD, que insistirán en el fracaso del "cambio". Para el PRD resultará aprovechable el escándalo de PEMEX, aunque la línea más sólida de su estrategia consista en subrayar la continuidad de las políticas económicas, la "identidad" del PRI y el PAN. Para el PRI la coyuntura es más compleja, sobre todo porque se encuentra dividido y está obligado a tomar distancia respecto al gobierno Zedillo; en cualquier caso, lo más probable es que su estrategia electoral insista en el "desencanto", en todas las promesas incumplidas de Vicente Fox.

Las dificultades previsibles

La bandera de la lucha contra la corrupción es siempre atractiva porque puede ser muy espectacular y de antemano casi cualquier acusación puede parecer verosímil para el público. De hecho, las denuncias y juicios por corrupción han sido una práctica casi ritual de todos los gobiernos de los últimos veinte años. Por otra parte, a falta de otros logros, sin cambios notables en ningún aspecto, éste es uno de los pocos temas en que el gobierno del Presidente Fox puede acreditar su voluntad de cambio y subrayar su distancia respecto al PRI. Es razonable que se use como eje de campaña.

Sin embargo, la estrategia no deja de ofrecer dificultades. Lo más importante es que el caso PEMEX no es el más apropiado para dar una imagen clara y creíble del cambio. A partir de lo que puede saberse, no es probable que implique a los miembros del gobierno de Zedillo; no permitirá el castigo ejemplar de grandes personajes; no tiene la magnitud que pudo suponerse en un principio, de modo que es factible que su resultado sea finalmente decepcionante. Por otra parte, se trata de un caso atípico: la participación del sindicato en la financiación de la campaña electoral del PRI; no se refiere a las formas de corrupción habituales, ni a las que provocan mayores escándalos.

En la práctica, no deja de haber suspicacias con respecto a la acción del Estado; hay denuncias ocasionales e insinuaciones de que la corrupción sigue siendo la norma en muchos ámbitos: en las adquisiciones del gobierno, en la contratación de obras públicas, en el otorgamiento de concesiones, en los procesos de privatización y fusión de empresas, etcétera. Lo que resulta más notorio es que ninguno de los grandes empresarios y banqueros que hicieron sus negocios al amparo del PRI sea mencionado siquiera en ninguna de las investigaciones sobre corrupción iniciadas por el gobierno de Fox. En particular llama la atención que no se hayan hecho públicas las investigaciones sobre irregularidades de los bancos en la operación de rescate financiero de 1995: significa un costo anual superior a los 3.000 millones de dólares. Se sabe que hubo operaciones ilegales de monto considerable y fue objeto de críticas constantes durante el gobierno del Presidente Zedillo. Es decir, difícilmente puede acreditarse el gobierno en su lucha contra la corrupción si no hace frente a ese problema.

Por otra parte, hacer de la corrupción el motivo central de la campaña electoral es arriesgado porque también la campaña de Vicente Fox en el año 2000 está bajo sospecha. El PRI y el PRD han presentado acusaciones formales contra la organización "Amigos de Fox", responsable de parte de la financiación de su campaña. La reacción ha sido buscar el amparo judicial fundado en el secreto bancario, lo cual no puede más que alentar las sospechas. Por su parte, el Presidente no ha pedido que se haga pública la información financiera de su campaña ni el Ministerio Público ha iniciado ninguna investigación al respecto. Todo eso pone en entredicho la voluntad de transparencia del gobierno y hace más endeble su eje de campaña.

Perspectivas

El juicio contra los líderes sindicales de PEMEX continuará durante varios meses y es probable que incluya filtraciones y golpes de efecto más o menos espectaculares conforme se acerque la elección de julio de 2003. En términos prácticos, el resultado podría ser una grave sanción financiera para el PRI, que limitase seriamente sus recursos para la campaña, pero su efecto en la opinión pública es dudoso.

En general, lo más probable es que domine en los próximos meses el clima de confrontación entre los partidos. Habrá episodios delicados, de difícil salida, como la aprobación del presupuesto público para el año 2003 y también amagos de acercamiento y negociación, pero a medida que pasen los meses será cada vez más costoso para la imagen de todos los partidos el entendimiento.

El PAN utilizará en la campaña los casos de corrupción, tratará de capitalizar la idea del "cambio" y pedirá una

mayoría suficiente para gobernar. El PRI y el PRD denunciarán el fracaso del "cambio". Sin embargo, dadas las circunstancias, no es previsible un cambio importante en la conformación del Congreso. En general, en las elecciones de mitad de periodo hay una participación bastante menor, son elecciones en las que pesa sobre todo el voto "duro", consolidado, de los partidos, y donde tienen influencia importante los gobernadores de los estados. A todo eso hay que sumar que el "desencanto" con el gobierno de Fox ha comenzado a manifestarse en las encuestas, pero esto no se traduce en un incremento considerable de intención de voto hacia los otros partidos. En resumen, lo más probable es que se mantenga un Congreso dividido, sin mayoría absoluta de ninguno de los partidos (el gobierno del Distrito Federal, Michoacán y Zacatecas permiten pensar en un incremento de los votos del PRD).

En cualquier caso, incluso si el PAN consiguiera una victoria electoral que le diese la mayoría en la Cámara de Diputados, quedaría el Senado –que se renueva en la elección de 2006– con el PRI como fuerza más importante. De seguir las cosas como están, eso significa que el gobierno tendría que renunciar a cualquier reforma constitucional y estaría sometido al desgaste que significa el conflicto con el Legislativo el resto del sexenio, agravado por la confrontación directa y abierta con el PRI. En vista de esa situación, la estrategia del gobierno (el intento de recuperar el ánimo de la coalición antipriísta mediante la bandera de la lucha contra la corrupción) abre la posibilidad de dos escenarios: uno maximalista, que incluye la división del PRI, y otro minimalista, que significa gobernar en solitario, por decreto, en los márgenes que tiene el Ejecutivo.

Si tuviese éxito la campaña para recuperar la indignación antipriísta y si prosperasen otras denuncias de corrupción, sería mayor la presión para que se dividiera el PRI; el liderazgo de Roberto Madrazo ha sido más bien indeciso y difícilmente puede moderar las fricciones entre un sector partidario de acercarse al PAN y apoyar el Presidente (cuyas ideas han sido expresadas por el expresidente Zedillo y el excandidato presidencial Francisco Labastida, entre otros) y otro sector que querría recuperar una identidad nacionalista y revolucionaria (una postura que hace tiempo encabeza el Senador Manuel Bartlett). Una división semejante ofrecería al gobierno la posibilidad de contar con mayorías en las dos cámaras, aparte de debilitar –incluso de manera decisiva– al PRI de cara a la elección presidencial de 2006.

El escenario alternativo, el PRI se mantiene unido y conserva sus posiciones en el Congreso, dejaría al Presidente obligado a gobernar en minoría. Algunos gestos y decisiones de los meses pasados indican la posibilidad de gestionar una alianza mínima de gobierno con los bancos, los medios de comunicación y Estados Unidos: suficiente para mantener la estabilidad económica y procurar el descrédito de los partidos de oposición en el Congreso.

Nota sobre los intereses españoles

En el escenario más probable, se mantendrá la actual correlación de fuerzas, que deja al gobierno sin mayoría en las cámaras y continuará la confrontación, más o menos espectacular, entre el gobierno y el PRI. Eso significa que no habrá posibilidades de reformas legislativas importantes: los cambios anunciados en los sectores energético, financiero, laboral y de telecomunicaciones no podrán realizarse. Es decir, no se abrirán posibilidades nuevas de inversión ni se modificarán, en lo esencial, las condiciones actuales.

Si el gobierno se viese obligado a terminar el sexenio en minoría, lo más probable sería que intentase impulsar su agenda mediante decretos –como lo ha hecho ya respecto a los medios de comunicación y con privilegios fiscales localizados–; es una situación de la que pueden beneficiarse, en particular, las empresas mayores, con capacidad para negociar directamente con la Presidencia.

Significativamente, el aumento de la tensión política y la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo no han tenido un impacto apreciable sobre la economía. No ha habido crecimiento económico en los últimos dos años, pero se mantiene controlada la inflación, se prevé un presupuesto público restrictivo y no ha habido alteraciones en los mercados financieros. Ahora bien, si la agenda de la lucha contra la corrupción adquiriese fuerza y mayor envergadura, no puede descartarse que se retomen las investigaciones sobre el rescate bancario de 1995 (que afectarían seguramente al BBVA y al SCH).

Conclusiones: La convocatoria electoral de julio próximo, para renovar el Congreso federal, planeará sobre el caso PEMEX durante los meses venideros. No hay duda que el tema será utilizado como arma arrojada por el gobierno y la oposición, y que ambos esperan sacar partido. Su resolución, pero sobre todo el resultado electoral, tendrán una influencia decisiva sobre la coyuntura mexicana de aquí al fin del sexenio del presidente Fox, en 2006.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© *Fundación Real Instituto Elcano 2011*

[Subir ▲](#)